

No. 32821

**SPAIN
and
ROMANIA**

**Agreement for the reciprocal promotion and protection of
investments. Signed at Bncharest on 25 January 1995**

Authentic texts: Spanish and Romanian.

Registered by Spain on 23 April 1996.

**ESPAGNE
et
ROUMANIE**

**Accord relatif à la promotion et à la protection des investisse-
ments. Signé à Bucarest le 25 janvier 1995**

Textes authentiques : espagnol et roumain.

Enregistré par l'Espagne le 23 avril 1996.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA PARA LA PROMOCIÓN Y LA PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES

España y Rumanía, en adelante "Las Partes Contratantes",

Deseando intensificar la cooperación económica existente entre ambos Estados y crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por los inversores de un Estado en el territorio del otro,

Conscientes de la necesidad de crear y mantener un marco estable, a fin de estimular la realización de inversiones y una óptima y eficiente utilización de los recursos económicos de cada país,

Reconociendo que la promoción y la protección recíprocas de inversiones, con arreglo al presente Acuerdo estimularán las iniciativas en este campo y mejorarán la prosperidad de ambos países,

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

DEFINICIONES

A los efectos del presente Acuerdo:

1. Por "inversiones" se designa todo tipo de activos, tales como bienes y derechos de toda naturaleza, adquiridos o invertidos de

acuerdo con las leyes y reglamentaciones del país receptor de la inversión, y en particular, aunque no exclusivamente:

- a) Bienes muebles e inmuebles, así como todo tipo de derechos reales relacionados con los mismos;
- b) Acciones, obligaciones, participaciones sociales y otras formas de participación en sociedades;
- c) Reinversión de beneficios;
- d) Derechos de crédito u otros derechos derivados de todo tipo de prestaciones que tengan valor económico y financiero;
- e) Derechos de propiedad industrial e intelectual, tales como: derechos de autor, marcas y nombres comerciales, patentes, licencias de fabricación, procedimientos técnicos, know-how, good-will, así como otros derechos similares;
- f) Concesiones otorgadas por la ley o en virtud de un contrato en particular las relacionadas con la prospección, exploración, extracción y explotación de los recursos naturales incluidos los de las zonas marítimas amparadas bajo la jurisdicción de una de las Partes Contratantes.

Cualquier modificación de la forma en la que estén invertidos o reinvertidos los activos no afectará su carácter de inversión.

2. El término "inversor" designa:

- a) En relación con España: cualquier persona física que sea residente en España con arreglo al derecho español y cualquier persona jurídica que, constituida de acuerdo con la legislación española, tenga su sede social en España.

- b) En relación con Rumanía: cualquier persona física que dé conformidad con las leyes vigentes, tenga ciudadanía rumana y cualquier persona jurídica que, constituida de acuerdo con las leyes rumanas, tenga su sede social en Rumanía.
3. El concepto de "rentas de inversión" se refiere a los rendimientos derivados de una inversión e incluye en particular, pero no exclusivamente, beneficios, dividendos e intereses.
4. El término "territorio" designa el territorio terrestre y el mar territorial de cada una de las Partes Contratantes así como la zona económica exclusiva y la plataforma continental que se extiende fuera del límite del mar territorial de cada una de las Partes Contratantes sobre la cual éstas tienen o pueden tener, de acuerdo con el Derecho Internacional, jurisdicción y derechos soberanos a efectos de prospección, exploración y preservación de recursos naturales.

ARTICULO 2

PROMOCION Y PROTECCION

1. Cada Parte Contratante promoverá y creará condiciones favorables a las inversiones realizadas en su territorio por los inversores de la otra Parte Contratante.
2. Las inversiones se realizarán de conformidad con las disposiciones legales de la Parte Contratante en cuyo territorio se efectúen y gozarán de la protección y garantías previstas en este Acuerdo.
3. Cada Parte Contratante se compromete a asegurar en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante.

Ninguna de las Partes Contratantes obstaculizará mediante medidas arbitrarias, injustificadas o discriminatorias, la gestión, mantenimiento o utilización de las inversiones, así como el derecho a la venta y liquidación de éstas.

4. A los inversores de una Parte Contratante se les permitirá contratar el personal directivo y técnico especializado de su elección, independientemente de su nacionalidad, en la medida en que esté permitido por las leyes del país anfitrión. De conformidad con las leyes relativas a la entrada y permanencia de extranjeros, a los inversores de cualquiera de las Partes Contratantes se les permitirá la entrada y permanencia en el territorio de la otra Parte Contratante con el fin de efectuar y administrar su inversión.
5. Cada Parte Contratante dará publicidad a todas las leyes y reglamentaciones que afecten a las inversiones en su territorio de los inversores de la otra Parte Contratante.

ARTICULO 3

TRATAMIENTO

1. Cada Parte Contratante otorgará a las inversiones efectuadas en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento no menos favorable que el otorgado a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de un tercer país que goce del tratamiento de Nación Más Favorecida.
2. Cada Parte Contratante otorgará a los inversores de la otra Parte Contratante, en lo que respecta a la dirección, mantenimiento, utilización o liquidación de sus inversiones, un tratamiento no menos favorable que el que le otorga los inversores de cualquier tercer país.

3. Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios que una Parte Contratante conceda a los inversores de un tercer Estado en virtud de su participación en una unión económica o aduanera, una zona de libre cambio o una organización económica regional de las que sea o pueda ser miembro cualquiera de las Partes Contratantes.
4. El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no se extenderá a deducciones y exenciones fiscales u otros privilegios análogos otorgados por cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros países en virtud de un Acuerdo para Evitar la Doble Imposición o de cualquier otro Acuerdo en materia de tributación.
5. Cada Parte Contratante respetará todas las obligaciones contraídas con los inversores de la otra Parte Contratante en relación con sus inversiones.
6. Además de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo, cada Parte Contratante aplicará, con arreglo a su Legislación Nacional, a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores.

ARTICULO 4

NACIONALIZACION Y EXPROPIACION

La nacionalización, expropiación, o cualquier otra medida de características o efectos similares que pueda ser adoptada por las autoridades de una Parte Contratante contra las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante en su territorio, deberá aplicarse exclusivamente por razones de utilidad pública conforme a las disposiciones legales y en ningún caso será discriminatoria. La

Parte Contratante que adoptara estas medidas pagará al inversor o a su derecho-habiente, sin demora injustificada, una indemnización adecuada, en moneda convertible.

ARTICULO 5

COMPENSACION POR PERDIOS

A los inversores de una Parte Contratante cuyas inversiones efectuadas en el territorio de la otra Parte Contratante sufran pérdidas debidas a guerra, otros conflictos armados, un estado de emergencia nacional, revolución, rebelión, u otros acontecimientos similares, incluyendo pérdidas ocasionadas por requisición, se les concederá, en lo que respecta a las medidas adoptadas para compensar las pérdidas, un tratamiento no menos favorable que aquel que la última Parte Contratante otorgue a los inversores de cualquier tercer Estado o a sus propios inversores. Cualquier pago hecho de acuerdo con este Artículo será realizado de forma pronta adecuada, efectiva y libremente transferible.

ARTICULO 6

TRANSFERENCIA

Cada Parte Contratante garantiza a los inversores de la otra Parte Contratante, con respecto a las inversiones realizadas en su territorio, de conformidad con las leyes y las normas de la Parte Contratante receptora de la inversión, la transferencia libre de las rentas de sus inversiones, y en particular, pero no exclusivamente, las siguientes:

- Las rentas de inversión, tal y como han sido definidas en el Artículo 1;

- Las indemnizaciones previstas en el Artículo 4;
- Las compensaciones previstas en el Artículo 5;
- El producto de la venta o liquidación, total o parcial, de una inversión;
- Los sueldos, salarios y demás remuneraciones recibidos por los ciudadanos de una Parte Contratante que hayan obtenido en la otra Parte Contratante los correspondientes permisos de trabajo en relación con una inversión.

La Parte Contratante receptora de la inversión facilitará al inversor de la otra Parte Contratante o a la sociedad en la que participa el acceso al mercado oficial de divisas en forma no discriminatoria, a fin de adquirir las divisas necesarias para realizar las transferencias amparadas en el presente Artículo.

Las transferencias se harán en divisas libremente convertibles.

Las transferencias se realizarán una vez que el inversor haya cumplido con las obligaciones fiscales establecidas por la Legislación vigente en la Parte Contratante receptora de la inversión.

Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar los procedimientos necesarios para efectuar dichas transferencias sin excesiva demora ni restricciones. En particular, no deberán transcurrir más de tres meses desde la fecha en que el inversor haya presentado debidamente las solicitudes necesarias para efectuar la transferencia hasta el momento en que dicha transferencia se realice efectivamente.

Las Partes Contratantes convienen en conceder a las transferencias a que se refiere el presente Artículo un tratamiento no menos favorable que el concedido a las transferencias originadas por inversiones realizadas por inversores de cualquier tercer Estado.

ARTICULO 7

PRINCIPIO DE SUBROGACION

En el caso de que una Parte Contratante haya otorgado cualquier garantía financiera sobre riesgos no comerciales en relación con una inversión efectuada por un inversor de esa Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última aceptará una aplicación del principio de subrogación de la primera Parte Contratante en los derechos del inversor, en cuanto a los pagos que le corresponda por indemnización, desde el momento en que ésta haya realizado un primer pago con cargo a la garantía concedida.

En ningún caso podrá producirse una subrogación en derechos de propiedad, uso, disfrute o cualquier otro derecho real derivado de la titularidad de la inversión sin la previa obtención de las autorizaciones pertinentes de acuerdo con la legislación sobre inversiones extranjeras vigentes en la Parte Contratante donde se realizó la inversión.

ARTICULO B

CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE E INVERSORES DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

1. Las controversias entre una de las Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante serán notificadas por escrito, incluyendo una información detallada, por el inversor a la Parte Contratante receptora de la inversión. En la medida de lo posible las Partes Contratantes tratarán de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.
2. Si estas controversias no pueden ser resueltas de esta forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de notificación escrita

mencionada en el párrafo 1, el conflicto será remitido, a elección del inversor:

- Al Tribunal de Arbitraje ad hoc establecido por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional; o
- Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.) creado por el "Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo se haya adherido a aquél.

Este artículo no impedirá a un nacional o a una empresa de una de las Partes Contratantes someter un conflicto referente a una inversión a los tribunales nacionales de la otra Parte Contratante, cuando tenga el derecho de hacerlo en conformidad con la legislación nacional de la otra Parte Contratante.

3. El arbitraje se basará en:

- Las disposiciones del presente Acuerdo;
- Las reglas y principios de Derecho Internacional generalmente admitidos;
- El derecho nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de Ley;
- Los acuerdos particulares que se hayan concluido con relación a la inversión.

4. Las sentencias de arbitraje serán definitivas y vinculantes para las Partes Contratantes en conflicto. Cada parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de acuerdo con su legislación nacional.

5. Cada Parte Contratante se compromete a proporcionar los medios efectivos para admitir reclamaciones y aplicar las leyes en relación con los acuerdos y autorizaciones de inversión y no impedirá a los inversores de la otra Parte Contratante el derecho de acceso a sus tribunales judiciales, tribunales e instituciones administrativas como a cualquier otro organismo que ostente competencias jurisdiccionales.

ARTICULO 9

CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo se resolverá hasta donde sea posible, mediante negociaciones entre las dos Partes Contratantes. Si el conflicto no pudiera resolverse de ese modo en un plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, será sometido, a petición de cualquiera de las Partes Contratantes a un Tribunal de arbitraje de conformidad con los términos de este Artículo.
2. El Tribunal de arbitraje se constituirá del siguiente modo: cada Parte Contratante designará un árbitro; los dos árbitros designados elegirán a un nacional de un tercer Estado como presidente del Tribunal.

Los árbitros serán designados en el plazo de tres meses, y el presidente en el plazo de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra Parte Contratante de su intención de someter el conflicto a un Tribunal de arbitraje.

3. Si una de las Partes Contratantes no hubiera designado a su árbitro en el plazo fijado, la otra Parte Contratante podrá solicitar al

Presidente de la Corte Internacional de Justicia que realice dicha designación.

En caso de que dos árbitros no llegaran a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro, en el período establecido, cualquiera de las Partes Contratantes podrá acudir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia para que efectue la designación pertinente. En caso de que el Presidente sea nacional de una de las Partes Contratantes o se halle impedido por otra causa, corresponderá al Vicepresidente efectuar los nombramientos. Si el Vicepresidente también fuera nacional de una de las dos Partes Contratantes o si se hallare también impedido, corresponderá al miembro de la Corte que siga inmediatamente en el orden jerárquico y no sea nacional de una de las Partes Contratantes, efectuar los nombramientos.

4. El Tribunal de arbitraje emitirá su dictamen en base a las normas contenidas en el presente Acuerdo, en otros convenios vigentes entre las Partes Contratantes y en los principios y normas generales de derecho internacional.

La decisión será adoptada por mayoría de votos. Esta decisión será definitiva y vinculante para ambas Partes Contratantes.

5. Cada Parte Contrante correrá con los gastos del árbitro por ella designado como con los relacionados con su representación en el procedimiento arbitral. Los demás gastos incluidos los del presidente serán sufragados, equitativamente, por ambas Partes Contratantes.
6. El Tribunal arbitral establecerá su propio procedimiento.

ARTICULO 10

APLICACION

El presente Acuerdo se aplicará a las inversiones que se realicen a partir de su entrada en vigor por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra.

El presente Acuerdo se aplicará también a las inversiones realizadas antes de la entrada en vigor del mismo por inversores de una Parte Contratante de conformidad con las disposiciones legales de la otra Parte Contratante en el territorio de esta última. Sin embargo, no se aplicará a las controversias o reclamaciones surgidas con anterioridad a su entrada en vigor.

ARTICULO 11

CONDICIONES MAS FAVORABLES

Condiciones más favorables a las del presente Acuerdo que hubiesen sido convenidas por una de las Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte Contratante, no se verán afectadas por el presente Acuerdo.

Si de las disposiciones legales de una Parte Contratante, o de obligaciones emanadas del Derecho Internacional aparte del presente Tratado, actuales o futuras, entre las Partes Contratantes, resultare una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Tratado, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente Tratado, en cuanto sea más favorable.

ARTICULO 12

ENTRADA EN VIGOR, PRORROGA Y DENUNCIA

1. El presente Acuerdo entrará en vigor un mes después de la fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado recíprocamente el cumplimiento de los respectivos trámites constitucionales internos en materia de celebración de Acuerdos.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período de diez años y, por tácita reconducción, por períodos consecutivos de diez años, a menos que sea denunciado. Durante el período inicial de validez del Acuerdo sólo podrá ser denunciado, mediante notificación previa por escrito de una de las dos Partes Contratantes, un año antes de su expiración. Una vez vencido el período inicial de validez, el Acuerdo podrá ser denunciado en cualquier momento, con un preaviso de doce meses.
3. En caso de expiración, las disposiciones del presente Acuerdo seguirán siendo aplicables por un período de diez años contados desde la fecha de su expiración, a las inversiones efectuadas dentro del período de validez del mismo.

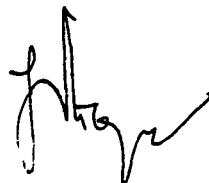
Hecho en dos originales en lengua española y rumana, que hacen igualmente fe, en Bucarest a ²⁵de enero de 1995.

Por España:



JAVIER SOLANA
Ministro de Asuntos Exteriores

Por Rumania:



FLORIN GEORGESCU
Ministro de Estado
y Ministro de Hacienda

[ROMANIAN TEXT — TEXTE ROUMAIN]

ACORD INTRE SPANIA SI ROMANIA PRIVIND PROMOVAREA SI PROTEJAREA RECIPROCA A INVESTITIILOR

Spania si Romania denumite in cele ce urmeaza "Partile Contractante",

In dorinta de a dezvolta cooperarea economica existenta intre cele doua state si de a crea conditii favorabile pentru investitiile realizate de investitorii unui stat pe teritoriul celuilalt stat,

Constiente de necesitatea creerii si mentinerii unui cadru stabil, in scopul de a stimula efectuarea de investitii si o utilizare optima si eficienta a resurselor economice ale fiecarei tari,

Recunoscand ca promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, conform prezentului Acord, vor stimula initiativa in acest domeniu si vor contribui la cresterea prosperitatii ambelor state,

Au convenit cele ce urmeaza :

ARTICOLUL 1

Definitii

In sensul acestui acord:

1. Prin termenul de "investitii" se desemneaza orice tip de active cum sunt bunuri si drepturi de orice natura dobandite si investite in conformitate cu legile si reglementarile tarii gazda a investitiei si in special, dar nu exclusiv :
 - a) Bunuri mobile si imobile, precum si orice alte drepturi reale legate de acestea;
 - b) Actiuni, obligatiuni, parti sociale si alte forme de participare la societati;
 - c) Beneficii reinvestite;

- d) Drepturi de creanta sau alte drepturi referitoare la prestari de orice fel avand o valoare economica sau financiara;
- e) Drepturi de proprietate industriala si intelectuala cum sunt drepturi de autor, marci si nume comerciale, patente, licente de fabricatie, procedee tehnice, know-how, good-will, precum si alte drepturi similare;
- f) Concesiuni acordate potrivit legii sau in virtutea unui contract, in special cele legate de prospectarea, explorarea, extractia si exploatarea de resurse naturale inclusiv cele din zonele maritime aflate sub jurisdicia uneia din Partile Contractante.
- Orice modificare a formei in care sunt investite sau reinvestite activele nu va afecta caracterul lor de investitie.
2. Termenul "investitor" desemneaza :
- a) Cu privire la Spania : orice persoana fizica care are rezidenta in Spania conform dreptului spaniol si orice persoana juridica care este constituita in conformitate cu legislatia spaniola si are sediul social in Spania.
- b) Cu privire la Romania : orice persoana fizica care, in conformitate cu legile in vigoare, are cetatenia romana, precum si orice persoana juridica constituita potrivit legii romane si avand sediul social in Romania;
3. Termenul de "venituri din investitii" se refera la veniturile provenite dintr-o investitie si include in special, dar nu exclusiv beneficii, dividende si dobanzi.
4. Termenul "teritoriu" desemneaza teritoriul terestru si marea teritoriala ale fiecărei Parti Contractante, precum si zona economica exclusiva si platforma continentală care se extinde in afara limitei apelor teritoriale ale fiecărei Parti Contractante, asupra carora acestea exercita sau pot exercita, in conformitate cu dreptul international, jurisdicie si drepturi suverane, in scopul prospectarii, explorarii si conservarii resurselor naturale.

ARTICOLUL 2

Promovarea si protejarea

1. Fiecare Parte Contractanta va promova si crea conditii favorabile pentru investitiile realizate pe teritoriul sau de catre investitorii celeilalte Parti Contractante.
2. Investitiile se vor realiza in conformitate cu prevederile legale ale Partii Contractante pe al carei teritoriu se efectueaza si se vor bucura de protectia si garantiile prevazute in acest Acord.

3. Fiecare Parte Contractanta se angajeaza sa asigure pe teritoriul sau un tratament just si echitabil investitiilor investitorilor celeilalte Parti Contractante.
Nici una din Partile Contractante nu va impiedica prin masuri arbitrare, nejustificate sau discriminatorii, conducerea, mentinerea sau utilizarea investitiilor, precum si dreptul de vanzare si lichidare a acestora.
4. Investitorilor fiecărei Parti Contractante li se va permite sa angajeze personal de conducere si tehnic, specializat, la alegerea lor, indiferent de nationalitate, in masura permisa de legislatia tarii gazda. In conformitate cu legile privind intrarea si sederea strainilor, investitorilor oricarei Parti Contractante li se va permite sa intre si sa ramana pe teritoriul celeilalte Parti Contractante in vederea efectuării si administrării investitiei lor.
5. Fiecare Parte Contractanta va publica toate legile si reglementarile care afecteaza investitiile de pe teritoriul sau ale investitorilor celeilalte Parti Contractante.

ARTICOLUL 3

Tratament

1. Fiecare Parte Contractanta va acorda investitiilor efectuate pe teritoriul sau de catre investitorii celeilalte Parti Contractante un tratament nu mai putin favorabil decat cel pe care il acorda investitiilor realizate pe teritoriul sau de investitorii unei tari terte care beneficiaza de tratamentul natiunii celei mai favorizate.
2. Fiecare Parte Contractanta va acorda investitorilor celeilalte Parti Contractante, in ceea ce priveste conducerea, mentinerea, utilizarea sau lichidarea investitiilor lor, un tratament nu mai putin favorabil decat cel pe care il acorda investitorilor oricarui stat tert.
3. Acest tratament nu se va extinde totusi asupra privilegiilor pe care o Parte Contractanta le va acorda investitorilor unei terte tari in virtutea participarii sale la o uniune economica sau vamala, o zona de liber schimb, sau la o organizatie economica regionala, la care oricare din Partile Contractante este sau ar putea sa devina membru.
4. Tratamentul acordat conform prezentului articol nu se va extinde asupra reducerilor si scutiilor fiscale sau altor privilegii similare acordate de oricare din Partile Contractante investitorilor din terte tari in virtutea unui Acord de evitare a dublei impuneri sau oricarui alt Acord in materie de impozitare.

5. Fiecare Parte Contractanta va respecta toate celelalte obligatii asumate cu privire la investitorii celeilalte Parti Contractante, in legatura cu investitiile lor.
6. Pe langa prevederile paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol, fiecare Parte Contractanta va aplica, in conformitate cu legislatia nationala, investitiilor investitorilor celeilalte Parti Contractante un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat propriilor sai investitori.

ARTICOLUL 4

Nationalizarea si exproprierea

Nationalizarea, exproprierea sau oricare alta masura cu caracter sau efecte similare care poate fi adoptata de catre autoritatile unei Parti Contractante impotriva investitiilor investitorilor celeilalte Parti Contractante, pe teritoriul sau, nu se pot aplica decat din motive de interes public, in conformitate cu dispozitiile legale si in nici un caz nu vor fi discriminatorii. Partea Contractanta care va adopta aceste masuri va plati investitorului sau beneficiarului sau de drept, fara intarziere nejustificata, o despagubire corespunzatoare in valuta convertibila.

ARTICOLUL 5

Despagubirea pentru pierderi

Investitorilor unei Parti Contractante a'le caror investitii efectuate pe teritoriul celeilalte Parti Contractante au suferit pierderi ca urmare a unui razboi sau altui conflict armat, a unei stari de necesitate nationala, revolutie, revolta sau altor evenimente similare, inclusiv pierderi ocazionate de rechizitionare, li se va acorda, in ceea ce priveste masurile adoptate pentru compensarea pierderilor, un tratament nu mai putin favorabil decat cel pe care aceasta din urma Parte Contractanta il acorda investitorilor oricarui stat tert sau propriilor sai investitori. Orice plata efectuata in conformitate cu acest articol va fi prompta, adecvata, efectiva si liber transferabila.

ARTICOLUL 6

Transferurile

Fiecare Parte Contractanta va garanta investitorilor celeilalte Parti Contractante, cu privire la investitiile realizate pe teritoriul sau, in conformitate cu legile si reglementarile

Partii Contractante primitoare a investitiei, transferul liber al veniturilor provenite din aceste investitii, si in special, dar nu exclusiv, urmatoarele :

- beneficiile din investitii asa cum au fost definite in Articolul 1 ;
- compensatiile prevazute la Articolul 4 ;
- compensatiile prevazute la Articolul 5 ;
- sumele rezultate din vanzarea sau lichidarea totala sau partiala a unei investitii ;
- castigurile, salariile si alte remuneratii primite de cetatenii unei Partii Contractante care au obtinut pe teritoriul celeilalte Partii Contractante permise de lucru corespunzatoare in legatura cu o investitie .

Partea Contractanta gazda a investitiei va facilita investitorului celeilalte Partii Contractante sau societatii in care participa, accesul la piata valutara oficiala, intr-o forma nediscriminatorie, in scopul obtinerii valutei necesare pentru realizarea transferurilor, potrivit prezentului Articol. Transferurile se vor efectua in valuta liber convertibila. Transferurile se vor realiza dupa ce investitorul si-a indeplinit obligatiile fiscale stabilite de legislatia in vigoare a Partii Contractante gazda a investitiei.

Partile Contractante se angajeaza sa faciliteze procedurile necesare pentru efectuarea transferurilor respective fara o intarziere nejustificata si fara restrictii. In special, nu vor trebui sa treaca mai mult de 3 luni de la data la care investitorul a prezentat in mod corespunzator cererile necesare pentru efectuarea transferului pana in momentul in care respectivul transfer se realizeaza efectiv.

Partile Contractante convin sa acorde transferurilor la care se refera prezentul Articol, un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat transferurilor provenite din investitiile realizate de investitorii oricarui stat tert.

ARTICOLUL 7

Principiul subrogarii

In cazul in care o Parte Contractanta a acordat o garantie financiara pentru riscuri necomerciale in legatura cu o investitie efectuata de un investitor al acestei Partii Contractante pe teritoriul celeilalte Partii Contractante, aceasta din urma va accepta aplicarea principiului subrogarii primei Partii Contractante in drepturile investitorului, privind platile cuvenite ca despagubiri, din momentul in care aceasta a efectuat prima plata in contul garantiei acordate.

In nici un caz nu va putea avea loc o subrogare in drepturile de proprietate, de folosinta, de uzufruct sau in oricare alt drept derivat din detinerea investitiei, fara a obtine in prealabil autorizatiile corespunzatoare conform legislatiei in vigoare privind investitiile straine, a Partii Contractante pe teritoriul careia s-a realizat investitia.

Articolul 8

Diferende dintre o Parte Contractanta si investitori ai celeilalte Parti Contractante

1. Diferendele dintre o Parte Contractanta si un investitor al celeilalte Parti Contractante vor fi notificate in scris Partii Contractante gazda a investitiei de catre respectivul investitor, incluzand o informare detaliata. In masura posibilitatilor Partile Contractante se vor stradui sa solutioneze aceste diferende pe cale amiabila.

2. Daca aceste diferende nu se pot solutiona in acest mod intr-un termen de 6 luni incepand cu data notificarii scrise mentionate la paragraful 1, diferendul va fi supus, la alegerea investitorului :
 - Unui Tribunal de Arbitraj "ad hoc" constituit prin Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Organizatiei Natiunilor Unite pentru Dreptul Comercial International ; sau
 - Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii (C.I.R.D.I.) creat prin "Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investitii intre state si persoane ale altor state", deschisa spre semnare la Washington la 18 martie 1965, cand fiecare stat, parte la prezentul Acord, a aderat la aceasta conventie.Prevederile acestui articol nu vor impiedica un national sau o societate a uneia dintre Partile Contractante sa supuna diferendul referitor la o investitie, instantelor celeilalte Parti Contractante, daca are dreptul sa o faca, in conformitate cu legislatia nationala a celeilalte Parti Contractante.

3. Arbitrajul se va baza pe :
 - Dispozitiile prezentului Acord ;
 - Normele si principiile de drept international universal acceptate ;
 - Legislatia nationala a Partii Contractante pe teritoriul careia s-a realizat investitia, incluzand reglementarile privind conflictele de legi ;
 - Acordurile specifice care au fost convenite in legatura cu investitiile.

4. Hotararile arbitrare vor fi definitive si obligatorii pentru Partile Contractante in diferend.
Fiecare Parte Contractanta se angajeaza sa execute hotararile in conformitate cu legislatia sa nationala.

5. Fiecare Parte Contractanta se angajeaza sa asigure mijloacele efective pentru a admite reclamatii si a aplica legile in legatura cu acordurile si autorizatiile de investitii si nu va impiedica dreptul investitorilor celeilalte Parti Contractante de a avea acces la tribunalele judiciare, tribunalele si institutiile administrative ca si la orice alt organism care are competenta jurisdictionala.

ARTICOLUL 9Diferende între Partile Contractante

1. Orice diferend între Partile Contractante privind interpretarea sau aplicarea acestui Acord va fi soluționat, pe cât posibil, prin negocieri între cele două Parti Contractante. Dacă diferendul nu poate fi reglementat în acest mod, în termen de 6 luni de la începerea negocierilor, el va fi supus, la cererea oricăreia din Partile Contractante, unui tribunal arbitral, în conformitate cu prevederile acestui articol.
2. Tribunalul arbitral se va constitui în modul următor : fiecare Parte Contractantă va desemna un arbitru; cei doi arbitri desemnați vor alege un cetățean al unui stat tert ca Președinte al tribunalului. Arbitrii vor fi desemnați într-un termen de 3 luni și Președintele într-un termen de 5 luni de la data la care oricare dintre cele două Parti Contractante a informat cealaltă Parte Contractantă asupra intenției sale de a supune diferendul unui tribunal arbitral.
3. Dacă una din Partile Contractante nu și-a desemnat arbitrul în termenul fixat, cealaltă Parte Contractantă va putea solicita Președintelui Curții Internaționale de Justiție să facă această numire. În cazul în care cei doi arbitri nu vor ajunge la un acord asupra numirii celui de al treilea arbitru în termenul stabilit, oricare din Partile Contractante va putea să apeleze la Președintele Curții Internaționale de Justiție care să efectueze desemnarea corespunzătoare. În cazul când Președintele este cetățean al uneia din Partile Contractante sau este împiedicat din alta cauză, Vicepreședintele va face numirile. Dacă Vicepreședintele este de asemenea cetățean al uneia din Partile Contractante sau dacă el este de asemenea împiedicat să exercite funcția menționată, membrul Curții care urmează imediat în grad și nu este cetățean al uneia din Partile Contractante, va efectua numirile necesare.
4. Tribunalul arbitral va adopta hotărârea sa pe baza prevederilor prezentului Acord, ale altor acorduri încheiate între Partile Contractante precum și a principiilor și normelor generale ale dreptului internațional. Hotărârea va fi adoptată cu majoritate de voturi. Această hotărâre va fi definitivă și obligatorie pentru ambele Parti Contractante.
5. Fiecare Parte Contractantă va suporta cheltuielile pentru arbitrul pe care l-a desemnat, precum și pe cele privind reprezentarea sa în procedura arbitrală. Celelalte cheltuieli, inclusiv cele privind Președintele vor fi suportate în părți egale de ambele Parti Contractante.
6. Tribunalul arbitral își va stabili propria procedură.

ARTICOLUL 10

Aplicarea

Prezentul Acord se va aplica investitiilor realizate, incepand cu intrarea in vigoare a acestuia, de catre investitorii unei Parti Contractante, pe teritoriul celeilalte. Prezentul Acord se va aplica, de asemenea, investitiilor realizate inaintea intrarii in vigoare a acestuia, de catre investitori ai unei Parti Contractante, in conformitate cu dispozitiile legale ale celeilalte Parti Contractante, pe teritoriul careia s-a realizat investitia. Cu toate acestea, Acordul nu se va aplica diferendelor sau reclamatiiilor aparute anterior intrarii sale in vigoare.

ARTICOLUL 11

Conditii mai favorabile

Conditiiile mai favorabile fata de prezentul Acord, deja convenite de catre una dintre Partile Contractante cu investitorii celeilalte Parti Contractante nu vor fi afectate prin prezentul Acord.

Daca din prevederile legale actuale sau viitoare ale unei Parti Contractante sau din obligatiile rezultate din dreptul international, altele decat cele din prezentul Acord, intre Partile Contractante, va rezulta o reglementare generala sau speciala in virtutea careia va trebui acordat investitiilor investitorilor celeilalte Parti Contractante un tratament mai favorabil decat cel prevazut in prezentul Acord, reglementarea respectiva va prevala fata de prezentul Acord in masura in care va fi mai favorabila.

ARTICOLUL 12

Intrarea in vigoare, valabilitatea si expirarea

1. Prezentul Acord va intra in vigoare la o luna de la data la care Partile Contractante si-au notificat reciproc indeplinirea procedurilor constitutionale interne respective in problema aprobarii acordurilor.
2. Prezentul Acord va ramane in vigoare pentru o perioada de zece ani si se va renoi prin tacita reconductiune pe noi perioade de zece ani, daca nu va fi denuntat. In perioada initiala de valabilitate, Acordul va putea fi denuntat numai prin notificare prealabila in scris a uneia dintre cele doua Parti Contractante, cu un an inainte de expirarea acestuia. Dupa incheierea perioadei initiale de valabilitate, Acordul va putea fi denuntat in orice moment cu un preaviz de 12 luni.

3. In cazul expirării, prevederile prezentului Acord, vor continua să se aplice pentru o perioadă de zece ani, începând de la data expirării sale, investițiilor efectuate în perioada de valabilitate a acestuia.

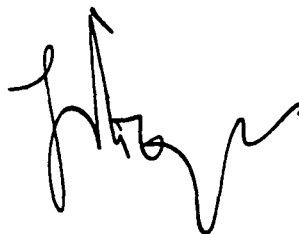
Incheiat în două originale, la București, la . . . ianuarie 1995
în limbile spaniolă și română, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Spania:



JAVIER SOLANA
Ministrul Afacerilor Externe

Pentru România:



FLORIN GEORGESCU
Ministrul Finanțelor

[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT¹ BETWEEN SPAIN AND ROMANIA FOR THE RECIPROCAL PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

Spain and Romania, hereinafter referred to as the “Contracting Parties”,

Desiring to strengthen the economic cooperation existing between the two States and to create favourable conditions for investments made by investors of one State in the territory of the other,

Aware of the need to create and maintain a stable framework, with a view to promoting investment and the most effective and efficient use of each country’s economic resources,

Recognizing that the reciprocal promotion and protection of investments under this Agreement will encourage initiatives in this field and increase prosperity for both countries,

Have agreed as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement,

1. The term “investment” means any kind of asset, such as property and rights of every kind, acquired or invested in accordance with the laws and regulations of the host country of the investment and in particular, though not exclusively:

(a) Movable and immovable property, together with any kind of property right relating thereto;

(b) Shares, bonds and other forms of participation in a company;

(c) Reinvestment of profits;

(d) Claims or other rights derived from any kind of loan having economic and financial value;

(e) Industrial and intellectual property rights, such as copyrights, commercial names, trade marks, patents, manufacturing licences, technical procedures, know-how, goodwill, and other similar rights;

(f) Concessions conferred by law or under a contract, especially concessions to search for, explore, extract and exploit natural resources, including those in maritime areas under the jurisdiction of a Contracting Party.

No modification in the form in which assets are invested or reinvested shall affect their status as investments.

¹ Came into force on 7 December 1995, i.e., one month after the date on which the Contracting Parties had notified each other (on 28 June and 7 November 1995) of the completion of their respective internal constitutional requirements, in accordance with article 12 (1).

2. The term “investor” means:

(a) In the case of Spain: any natural person who is a resident of Spain under Spanish law, and any legal person which, constituted under Spanish law, has its registered address in Spain;

(b) In the case of Romania: any natural person who, in accordance with the laws in force, has Romanian citizenship, and any legal person which, constituted under Romanian law, has its registered address in Romania.

3. The term “returns on an investment” refers to the amounts yielded by an investment and includes in particular, though not exclusively, profits, dividends and interest.

4. The term “territory” means the land territory and the territorial sea of each Contracting Party, together with the exclusive economic zone and the continental shelf beyond the limits of the territorial sea of each Contracting Party over which it exercises or may exercise, in accordance with international law, jurisdiction and sovereign rights for the purposes of the prospection, exploration and conservation of natural resources.

Article 2

PROMOTION AND PROTECTION

1. Each Contracting Party shall promote and create favourable conditions for investments made in its territory by investors of the other Contracting Party.

2. Investments shall be made in accordance with the law of the Contracting Party in whose territory they are made and shall enjoy the protection and guarantees provided for in this Agreement.

3. Each Contracting Party undertakes to guarantee within its territory fair and equitable treatment for investments made by investors of the other Contracting Party.

Neither Contracting Party shall obstruct by arbitrary, unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance or use of those investments, or the right to sell or liquidate them.

4. Investors of a Contracting Party shall be allowed to engage the managerial and specialized technical personnel of their choice, regardless of nationality, insofar as permitted under the law of the host country. In accordance with the laws relating to the entry and residence of foreigners, each Contracting Party shall allow investors of the other Contracting Party to enter and reside in its territory for the purpose of making or managing an investment.

5. Each Contracting Party shall publicize all laws and regulations that affect the investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

Article 3

TREATMENT

1. Each Contracting Party shall accord to investments made within its territory by investors of the other Contracting Party treatment no less favourable than

that accorded to investments made within its territory by investors of a third country which enjoys most-favoured-nation status.

2. Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party, in relation to the management, maintenance, use or liquidation of their investments, treatment no less favourable than that which it accords to investors of any third country.

3. Such treatment shall not, however, extend to the privileges which a Contracting Party may grant to investors of a third State by virtue of its participation in an economic or customs union, a free-trade area or a regional economic organization of which either Contracting Party is or may become a member.

4. The treatment accorded under this article shall not extend to tax deductions and exemptions or other similar privileges granted by either Contracting Party to investors of a third country under an agreement for the avoidance of double taxation or any other taxation agreement.

5. Each Contracting Party shall fulfil the commitments entered into with investors of the other Contracting Party in respect of their investments.

6. In addition to applying the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article, each Contracting Party shall, in conformity with its national law, accord to the investments of investors of the other Contracting Party treatment no less favourable than that accorded to its own investors.

Article 4

NATIONALIZATION AND EXPROPRIATION

Nationalization, expropriation or any other measure having similar characteristics or effects that may be applied by the authorities of one Contracting Party against the investments in its territory, of investors of the other Contracting Party, must be effected exclusively for reasons of public interest, in accordance with the law, and shall in no case be discriminatory. The Contracting Party adopting such measure shall pay to the investor or his or its legal beneficiary, without undue delay, appropriate compensation in convertible currency.

Article 5

COMPENSATION FOR LOSSES

Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war, other armed conflict, a state of national emergency, revolution, rebellion, or other similar event, including losses due to requisitioning, shall be accorded, as regards measures in compensation for the losses, treatment no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to investors of any third State or its own investors. Any payment made under this article shall be prompt, adequate, effective and freely transferable.

Article 6

TRANSFERS

Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party in respect of investments made in its territory, in accordance with the laws and regulations of the host Contracting Party of the investment, the unrestricted transfer of returns on those investments, including in particular, though not exclusively, the following:

- Returns on an investment, as defined in article 1;
- Indemnities as provided for in article 4;
- Compensation as provided for in article 5;
- Proceeds from the sale or liquidation, in full or in part, of an investment;
- Salaries, wages and other remuneration received by nationals of one Contracting Party who have obtained in the other Contracting Party the necessary work permits in connection with an investment.

The host Contracting Party of the investment shall enable an investor of the other Contracting Party, or the company in which the investor is invested, to have access to the official foreign-exchange on a non-discriminatory basis in order to purchase the necessary currency to make the transfers referred to in this article.

Transfers shall be made in freely convertible currencies.

Transfers shall be made once the investor has complied with the fiscal obligations laid down under the laws in force in the host Contracting Party of the investment.

The Contracting Parties undertake to facilitate the procedures necessary for such transfers to be made without excessive delay or restrictions. In particular, no more than three months shall elapse between the date on which the investor duly submits the necessary applications for making the transfer and the date on which the transfer actually takes place.

The Contracting Parties undertake to accord to the transfers referred to in this article treatment no less favourable than that accorded to transfers deriving from investments made by investors of any third State.

Article 7

PRINCIPLE OF SUBROGATION

Where one Contracting Party has provided a financial guarantee against non-commercial risks in respect of an investment made by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall, once the former Contracting Party has made a first payment in connection with the financial guarantee, recognize the transfer to the former Contracting Party of the rights of the investor with respect to payments due in compensation.

In no case may subrogation apply in respect of rights of ownership, use or enjoyment or any other property right deriving from ownership of the investment unless the relevant authorizations required under the laws on foreign investment in force in the Contracting Party in which the investment was made have first been obtained.

Article 8

DISPUTES BETWEEN A CONTRACTING PARTY AND INVESTORS OF THE OTHER CONTRACTING PARTY

1. Disputes between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party shall be notified in writing by the investor, together with a detailed report, to the host Contracting Party of the investment. The Contracting Parties shall, as far as possible, endeavour to settle such differences amicably.

2. If the dispute cannot be thus settled within six months from the date of the written notification mentioned in paragraph 1, the conflict shall be submitted at the choice of the investor to:

- An *ad hoc* arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law; or
- The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) established under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, which was opened for signature at Washington, D.C. on 18 March 1965,¹ provided that both Parties to the present Agreement have acceded to that Convention.

This article shall not prevent a national or a company of a Contracting Party from submitting an investment-related dispute to the national courts of the other Contracting Party, if he or it is entitled to do so under the national legislation of the other Contracting Party.

3. Arbitration shall be based on:

- The provisions of the present Agreement;
- The generally accepted rules and principles of international law;
- The national law of the Contracting Party in whose territory the investment was made, including the rules on conflict of laws;
- The provisions of other agreements governing investments.

4. The arbitral award shall be final and binding on the Contracting Parties to the dispute. Each Contracting Party undertakes to carry out the award in accordance with its national law.

5. Each Contracting Party undertakes to provide effective means of addressing complaints and enforcing laws with respect to investment agreements and authorizations and shall not impede the right of investors of the other Contracting Party to appeal to its courts, tribunals and administrative institutions or any other body having jurisdiction.

Article 9

DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1. Any dispute between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement shall, to the extent possible, be settled by negotiations between the two Contracting Parties. If a dispute cannot be thus settled within

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 575, p. 159.

six months from the start of the negotiations, it shall, at the request of either of the two Contracting Parties, be submitted to an arbitral tribunal in accordance with the provisions of this article.

2. The arbitral tribunal shall be constituted as follows: each Contracting Party shall appoint one arbitrator; the two arbitrators shall select a national of a third State as President of the tribunal.

The arbitrators shall be appointed within three months and the President within five months from the date on which either of the two Contracting Parties informs the other Contracting Party of its intention to submit the dispute to an arbitral tribunal.

3. If either Contracting Party fails to appoint its arbitrator within the period specified, the other Contracting Party may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment.

Where the two arbitrators are unable to agree on the appointment of the third arbitrator within the designated period, either Contracting Party may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment. If the President is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented from acting, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or also is otherwise prevented from acting, the next most senior member of the Court who is not a national of either Contracting Party shall make the appointments.

4. The arbitral tribunal shall issue its ruling in accordance with the provisions of the present Agreement, and of other agreements in force between the Contracting Parties and the general principles and norms of international law.

The court shall take its decision by a majority of votes. The decision shall be final and binding on both Contracting Parties.

5. Each Contracting Party shall defray the expenses of the arbitrator appointed by it and of its representation in the arbitral proceedings. The remaining expenses, including those of the President, shall be shared equitably by the two Contracting Parties.

6. The arbitral tribunal shall determine its own procedures.

Article 10

SCOPE OF THE AGREEMENT

This Agreement shall apply to investments made after its entry into force by investors of one Contracting Party in the territory of the other.

This Agreement shall also apply to investments made before its entry into force by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in accordance with the law of the latter Contracting Party. It shall not, however, apply to disputes or claims which pre-date its entry into force.

Article 11

MORE FAVOURABLE TERMS

Where one Contracting Party has agreed with investors of the other Contracting Party to terms more favourable than those of this Agreement, those terms shall not be affected by this Agreement.

If the law of either Contracting Party, or current or future obligations deriving from international law other than the present Agreement between the Contracting Parties, should give rise to general or special rules by virtue of which the investments of investors of the other Contracting Party are accorded treatment more favourable than that provided for in this Agreement, such rules shall, to the extent that they are more favourable, prevail over the present Agreement.

Article 12

ENTRY INTO FORCE, EXTENSION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force one month after the date on which the Parties notify each other that their respective domestic constitutional formalities for the conclusion of agreements have been completed.

2. This Agreement shall remain in force for a period of ten years and thereafter shall be automatically renewed for consecutive periods of ten years, unless it is terminated. During the initial period of validity, the Agreement may be terminated only if one Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing to this effect one year before its expiry. Once the initial period of validity expires, the Agreement may be terminated at any time, provided that twelve months' notice is given.

3. In the event of expiry, the provisions of this Agreement shall continue to apply for a period of ten years after the date of expiry to investments made during the period of validity of the Agreement.

DONE at Bucharest on 25 January 1995 in duplicate in the Spanish and Romanian languages, both texts being equally authentic.

For Spain:

JAVIER SOLANA
Minister for Foreign Affairs

For Romania:

FLORIN GEORGESCU
Minister of State and Minister
of Finance

[TRADUCTION — TRANSLATION]

ACCORD¹ ENTRE L'ESPAGNE ET LA ROUMANIE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

L'Espagne et la Roumanie, ci-après dénommées « les Parties contractantes »,

Désireuses d'intensifier la coopération économique existant entre les deux Etats et de créer des conditions favorables aux investissements réalisés par les investisseurs de l'un des Etats sur le territoire de l'autre,

Conscientes de la nécessité de créer et de maintenir un marché stable, afin de stimuler la réalisation d'investissements et une utilisation optimale efficace des ressources économiques de chacun des pays,

Reconnaissant que la promotion et la protection réciproques des investissements, conformément au présent Accord, sont de nature à stimuler des initiatives dans ce domaine et à accroître la prospérité des deux pays,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme « investissements » désigne tout type d'actifs, tels que biens et droits de toute nature, acquis ou investis conformément aux lois et règlements du pays qui reçoit l'investissement, et en particulier, mais non exclusivement :

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tout type de droits réels liés à ceux-ci;

b) Les actions, obligations, participations sociales et autres formes de participation dans des sociétés;

c) Le réinvestissement de bénéfices;

d) Les créances et autres droits dérivés de prestations de tous ordres ayant une valeur économique et financière;

e) Les droits de propriété industrielle et intellectuelle, tels que : droits d'auteur, marques et noms de commerce, brevets, licences de fabrication, procédés techniques, savoir-faire (know-how), fonds de commerce (good-will), ainsi que d'autres droits similaires;

f) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, et notamment celles liées à la prospection, à l'exploration, à l'extraction et à l'exploitation de ressources naturelles, y compris celles des zones maritimes soumises à la juridiction de l'une des Parties contractantes.

¹ Entré en vigueur le 7 décembre 1995, soit un mois après la date à laquelle les Parties contractantes s'étaient notifié (les 28 juin et 7 novembre 1995) l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles internes respectives, conformément au paragraphe 1 de l'article 12.

Aucune modification de la forme sous laquelle sont investis ou réinvestis les actifs ne porte atteinte à leur qualité d'investissement.

2. Le terme « investisseur » désigne :

a) En ce qui concerne l'Espagne : toute personne physique considérée comme résidente en Espagne conformément au droit espagnol et toute personne morale constituée conformément à la législation espagnole et ayant son siège social en Espagne.

b) En ce qui concerne la Roumanie : toute personne physique qui, conformément aux lois en vigueur, a la nationalité roumaine et toute personne morale qui, constituée conformément aux lois roumaines, a son siège social en Roumanie.

3. L'expression « revenus de l'investissement » s'entend du produit tiré d'un investissement, et comprend en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, dividendes et intérêts.

4. Le terme « territoire » désigne le territoire terrestre et la mer territoriale de chacune des Parties contractantes, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental situés au-delà des limites de la mer territoriale de chacune des Parties contractantes, sur lesquels ces dernières ont ou peuvent avoir, conformément au droit international, juridiction et des droits souverains aux fins de la protection, de l'exploration et de la préservation des ressources naturelles.

Article 2

PROMOTION ET PROTECTION

1. Chaque Partie contractante encourage la réalisation sur son territoire d'investissements par les investisseurs de l'autre Partie contractante et crée des conditions favorables à cet effet.

2. Les investissements sont réalisés conformément aux dispositions légales de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont effectués et jouissent de la protection et des garanties prévues dans le présent Accord.

3. Chaque Partie contractante s'engage à assurer sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante.

Aucune des Parties contractantes ne met d'obstacle, par des mesures arbitraires, injustifiées ou de caractère discriminatoire, à la gestion, l'entretien ou l'utilisation des investissements, ni à la vente ou à la liquidation de ces derniers.

4. Les investisseurs de chacune des Parties contractantes ont le droit d'engager le personnel de direction et le personnel technique spécialisé de leur choix, indépendamment de la nationalité dudit personnel, dans la mesure autorisée par la législation du pays hôte. Conformément aux lois relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, les investisseurs de l'une des Parties contractantes ont le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'autre Partie afin d'effectuer des investissements et de les gérer.

5. Chacune des Parties contractantes donne la publicité voulue à tous les lois et règlements affectant les investissements sur son territoire des investisseurs de l'autre Partie contractante.

Article 3

TRAITEMENT

1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs d'un pays tiers qui bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée.

2. Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la direction, le maintien, l'utilisation ou la liquidation de ses investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs d'un pays tiers.

3. Ce traitement ne s'applique cependant pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un pays tiers en vertu de sa participation à une union économique ou douanière, à une zone de libre-échange ou à une organisation économique régionale dont est membre ou peut être membre l'une ou l'autre des Parties contractantes.

4. Le traitement accordé conformément au présent article ne s'applique pas aux déductions ou exonérations fiscales ou autres privilèges analogues accordés par l'une ou l'autre des Parties contractantes à des investisseurs de pays tiers en vertu d'un accord destiné à éviter la double imposition ou de tout autre accord en matière fiscale.

5. Chacune des Parties contractantes respecte toutes les obligations souscrites à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante en ce qui concerne leurs investissements.

6. Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, chaque Partie contractante applique, conformément à sa législation nationale, aux investissements des investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à ses propres investisseurs.

Article 4

NATIONALISATION ET EXPROPRIATION

La nationalisation, l'expropriation ou toute autre mesure de nature similaire ou à effets similaires qui pourraient être adoptées par les autorités de l'une des Parties contractantes contre les investissements des investisseurs de l'autre Partie sur son territoire, devront être appliquées exclusivement pour des raisons d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur et ne devront, en aucun cas, être discriminatoires. La Partie contractante qui adoptera ces mesures paiera à l'investisseur ou à son ayant-droit, sans retard injustifié, une indemnité adéquate, en monnaie convertible.

Article 5

DÉDOMMAGEMENT POUR PERTES

Les investisseurs d'une Partie contractante qui auront subi des pertes du fait que la valeur de leurs investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante

aura été amoindrie par suite de faits de guerre, d'autres conflits armés, d'un état d'urgence nationale, d'une révolution, d'une révolte ou d'autres événements similaires, y compris du fait de réquisitions, se verront accorder, en ce qui concerne les mesures adoptées pour les dédommager de leurs pertes, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui réservé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de pays tiers. Le paiement effectué en vertu du présent article sera rapide, approprié, effectif et les fonds seront librement transférables.

Article 6

TRANSFERTS

Chacune des Parties contractantes garantit aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne les investissements effectués sur son territoire, conformément aux lois et aux normes de la Partie contractante qui reçoit l'investissement, le droit de transférer librement le produit de ces investissements, et en particulier, mais non exclusivement, les suivants :

- Les revenus de l'investissement, tel qu'il sont définis à l'article premier;
- Les indemnités visées à l'article 4;
- Les dédommagements prévus à l'article 5;
- Le produit de la vente ou de la liquidation, totale ou partielle, des investissements;
- Les traitements, salaires et autres rémunérations perçues par les citoyens de l'une des Parties qui auront obtenu de l'autre Partie les permis de travail requis en relation avec un investissement;

La Partie contractante qui reçoit l'investissement facilite à l'investisseur de l'autre Partie contractante ou à la société à laquelle il participe l'accès au marché officiel des devises dans des conditions non discriminatoires, afin de lui permettre d'acquérir les devises nécessaires pour effectuer les transferts visés au présent article.

Les transferts sont effectués en devises librement convertibles.

Les transferts sont effectués lorsque l'investisseur s'est acquitté des obligations fiscales prévues par la législation en vigueur dans la Partie contractante qui reçoit l'investissement.

Les Parties contractantes s'engagent à faciliter les formalités nécessaires pour effectuer lesdits transferts sans retard excessif ni restrictions. En particulier, il ne devra pas s'écouler plus de trois mois entre la date à laquelle l'investisseur aura dûment présenté les demandes nécessaires pour effectuer le transfert et le transfert effectif.

Les Parties contractantes accordent aux transferts visés au présent article un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux transferts ayant pour origine des investissements effectués par des investisseurs d'Etats tiers.

Article 7

PRINCIPE DE SUBROGATION

Si l'une des Parties contractantes a accordé une garantie financière contre les risques non commerciaux en relation avec un investissement effectué par un investisseur sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière accepte d'appliquer le principe de la subrogation de la première Partie nommée sur les droits de l'investisseur, en ce qui concerne les paiements auxquels il a droit au titre d'indemnisation, à condition que la première Partie contractante ait effectué un premier paiement au titre de la garantie accordée.

En aucun cas, il ne peut être effectué de subrogation sur les droits de propriété, d'usage, de jouissance ou sur tout autre droit réel découlant de la titularité de l'investissement, sans obtention préalable des autorisations pertinentes, conformément à la législation sur les investissements étrangers en vigueur dans la Partie contractante où l'investissement a été réalisé.

Article 8

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ET LES INVESTISSEURS DE L'AUTRE PARTIE

1. Tout différend entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est notifié par écrit, accompagné de tous les détails pertinents, par l'investisseur à la Partie contractante qui reçoit l'investissement. Les Parties contractantes s'efforcent, autant que possible, de régler ces différends à l'amiable.

2. Si le différend ne peut pas être réglé de cette manière dans un délai de six mois à compter de la date de la notification écrite visée au paragraphe 1, il est soumis, au choix de l'investisseur :

- Au tribunal d'arbitrage spécial institué par le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international; ou
- Au Centre international de règlement des différends en matière d'investissements (CIRDI) créé par la « Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965¹, si chacun des Etats parties au présent Accord a adhéré à cette Convention;

Le présent article ne porte pas atteinte au droit qu'a un national ou une entreprise de l'une des Parties contractantes de soumettre un différend relatif à un investissement aux tribunaux nationaux de l'autre Partie contractante, s'il est habilité à le faire conformément à la législation nationale de l'autre Partie contractante.

3. La sentence arbitrale a pour base :

- Les dispositions du présent Accord;
- Les règles et principes généralement admis du droit international;
- Le droit national de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, y compris les règles applicables aux conflits de lois;

¹ Nations Unies, *Recueil des Traités*, vol. 575, p. 159.

— Les accords particuliers qui ont pu être conclus en relation avec l'investissement.

4. Les sentences arbitrales sont définitives et ont force obligatoire pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences conformément à sa législation nationale.

5. Chaque Partie contractante s'engage à fournir les moyens voulus pour faire droit aux réclamations et appliquer les lois en relation avec les accords et les autorisations d'investissement et elle ne porte en rien atteinte au droit qu'ont les investisseurs de l'autre Partie contractante d'accéder à ses tribunaux judiciaires, tribunaux et institutions administratives ou autre organisme ayant des compétences juridictionnelles.

Article 9

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est, autant que possible, résolu par voie de négociation entre les Parties contractantes. Si le différend ne peut être résolu de cette manière dans un délai de six mois à compter du début des négociations, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie, à un tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions du présent article.

2. Le tribunal d'arbitrage est constitué comme suit : chacune des Parties désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés élisent un national d'un Etat tiers comme Président du tribunal.

Les arbitres sont désignés dans un délai de trois mois et le Président dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'une quelconque des Parties contractantes a informé l'autre Partie de son intention de soumettre le différend au tribunal d'arbitrage.

3. Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre dans le délai fixé, l'autre Partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à la désignation.

Si les deux arbitres ne parviennent pas à un accord sur la désignation du troisième arbitre dans le délai fixé, l'une quelconque des Parties contractantes peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à la désignation nécessaire. Si le Président est un national de l'une des Parties contractantes ou s'il se trouve empêché pour toute autre raison, il appartient au Vice-Président de procéder aux nominations. Si le Vice-Président est lui aussi un national de l'une des Parties contractantes ou s'il se trouve lui aussi empêché, il appartient au membre de la Cour suivant immédiatement dans l'ordre hiérarchique, qui n'est un national d'aucune des Parties contractantes, de procéder aux nominations.

4. Le tribunal d'arbitrage rend sentence sur la base des normes figurant dans le présent Accord, dans d'autres accords en vigueur entre les Parties contractantes, et sur les principes et normes générales du droit international.

La décision est adoptée à la majorité des voix; elle est définitive et a force obligatoire pour les deux Parties contractantes.

5. Chacune des Parties prend à sa charge les frais de l'arbitre désigné par elle ainsi que ceux de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les autres frais, y compris ceux du Président, sont partagés à égalité entre les deux Parties contractantes.

6. Le tribunal d'arbitrage arrête lui-même son règlement intérieur.

Article 10

CHAMP D'APPLICATION

Le présent Accord s'applique aux investissements effectués à partir de la date de son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre.

Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes conformément aux dispositions légales de l'autre Partie contractante sur le territoire de cette dernière. Il ne s'applique toutefois pas aux différends ou réclamations nés ou présentés avant son entrée en vigueur.

Article 11

EXISTENCE DE CONDITIONS PLUS FAVORABLES

Les conditions plus favorables que celles prévues dans le présent Accord dont l'une des Parties serait convenue avec des investisseurs de l'autre Partie ne sont pas modifiées par les dispositions du présent Accord.

Si, en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes, ou d'obligations — présentes ou futures — contractées conformément au droit international en dehors du présent Accord entre les Parties contractantes, il existe des dispositions générales ou particulières en vertu desquelles les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante doivent bénéficier d'un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, cette réglementation l'emporte sur le présent Traité, dans la mesure où elle est plus favorable.

Article 12

ENTRÉE EN VIGUEUR, PROROGATION ET DÉNONCIATION

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifiées mutuellement l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles internes respectives en matière de conclusion d'accords.

2. Le présent Accord demeurera en vigueur pour une durée de dix ans et, par voie de reconduction tacite, pour des périodes consécutives de dix ans, à moins qu'il ne soit dénoncé. Durant la période initiale de validité de l'Accord, il ne pourra être dénoncé, moyennant un préavis écrit de l'une des Parties contractantes, qu'un an avant la date de son expiration. Une fois écoulée la période initiale de validité, l'Accord pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de douze mois.

3. En cas de dénonciation, les dispositions du présent Accord demeureront applicables, pendant une période de dix ans à compter de la date de son expiration, aux investissements effectués durant sa période de validité.

FAIT en deux originaux, en langues espagnole et roumaine, les deux textes faisant également foi, à Bucarest le 25 janvier 1995.

Pour l'Espagne :

Le Ministre des affaires extérieures,

JAVIER SOLANA

Pour la Roumanie :

Le Ministre d'Etat
et Ministre des finances,

FLORIN GEORGESCU
